

Santiago, diecisiete de octubre de dos mil ventitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Jeannette del Carmen Gajardo González quien de conformidad a lo previsto en los artículos 28 y siguientes de la ley N° 20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada el 24 de febrero de 2023, en sesión ordinaria N° 1.341, del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo del proceso de amparo de información pública, rol N° C-6885-2022.

Narra que con fecha 7 de junio de 2022 solicitó a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño la siguiente información: “... *copia de temas tratados en audiencia de fecha 16 de abril de 2019 entre don (...) - Audiencia AH001AW0631467 sobre denuncias de irregularidades por diferentes funcionarios directivos del Departamento de Cooperativas, que habría realizado el gestor de intereses sr. (...) en representación de una institución. Debido a que actualmente, tengo en tramitación algunas solicitudes con el Departamento de Cooperativas, en el marco de un juicio de reorganización de cooperativa que es fiscalizada por el Departamento de Cooperativas es importante para mí estar en conocimiento qué tipo de irregularidades habrían cometido funcionarios de dicha repartición, el tipo de cargo que ocupan y relativo a qué materia es la denuncia interpuesta por el gestor de intereses individualizado. Indica datos del informe requerido.*”

Refiere que dicha petición fue contestada mediante Oficio Folio OFIC202202370, por el cual se le indicó que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la ley N°20.285, y lo señalado en los artículos 31 y 33 de su Reglamento, la información solicitada se encontraba publicada y de libre disposición al público en el siguiente enlace: <https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AH001/audiencias/2019/173208>.

Agrega que esa respuesta no aporta los antecedentes requeridos por ella, desde que se limita a entregar datos que salen publicados en la página Web, sin indicar el tipo de cargo que ocupan los denunciados y respecto de qué materia es la denuncia, resultando inverosímil que no haya ningún tipo de registro de la reunión. Por lo anterior dedujo amparo en contra del citado oficio, fundado en la respuesta incompleta entregada y solicitando se le hiciera entrega de los antecedentes que pidió.



Menciona que, evacuando el traslado conferido en la tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño manifestó que la reclamante solicitó información respecto de los temas tratados en la audiencia de lobby, de forma que la respuesta entregada satisface el requerimiento en cuestión, añadiendo que por el amparo se intentaba obtener información no comprendida en su solicitud de acceso a la información original, lo cual también vulnera el principio de congruencia que debe regir las solicitudes que plantean las personas respecto de la Administración. Sin perjuicio de hacer presente que no cuenta con más información que la que ya se encuentra publicada en el portal del lobby ya entregado a la solicitante Jeannette del Carmen Gajardo Gonzalez, habiendo realizado búsquedas y agotado todos los medios a su disposición para encontrarla. Aspectos que no habrían sido abordados en la respuesta.

Apunta que el H. Consejo para la Transparencia rechazó el amparo en comento, teniendo en consideración que el órgano reclamado había comunicado a la reclamante en su respuesta, la fuente, el lugar y la forma para acceder debidamente a la información relativa a temas tratados en audiencia de lobby llevada a cabo el 16 de abril de 2019 sobre denuncias de irregularidades por diferentes funcionarios directivos del departamento de cooperativas, que habría realizado el gestor de intereses en representación de una institución, por lo que entendía que había satisfecho su obligación de informar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley de Transparencia.

Observa que la decisión reclamada no se ajusta a derecho, por cuanto la respuesta del organismo de la Administración del Estado no satisfizo el requerimiento efectuado por ésta, dado que el portal al cual fue reenviada se limita a señalar en cuanto al ítem Materias: realizar denuncias de irregularidades por diferentes funcionarios directivos del Departamento de Cooperativas, en tanto que en la misma solicitud de información había consignado que ella apuntaba a conocer “que tipo de irregularidades habrían cometido funcionarios de dicha repartición, el tipo de cargo que ocupan y relativo a qué materia es la denuncia interpuesta por el gestor de intereses individualizado”, en tanto que la respuesta no da cuenta de ninguno de esos aspectos.



Adiciona que tampoco se ha dado cuenta de qué modo, procedimiento o forma se efectuó la revisión que llevó a para sostener que no cuentan con la información, ni siendo la esgrimida constitutiva de causal de reserva.

Señala que llama la atención que no quede registro de la denuncia que habría interpuesto el gestor de intereses y acta de la propia reunión que solicitó para conocer el contenido de las materias denunciadas y los cargos de los funcionarios denunciados del Departamento de Cooperativas.

Por ello, concluye que la decisión contraviene los artículos 8°, inciso segundo de la Constitución Política de la República y 5°, inciso primero, de la Ley de Transparencia.

Pide, en definitiva, se deje sin efecto la decisión de Amparo pronunciada en el caso C-6885-2022, adoptada en sesión ordinaria N° 1.341 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de febrero de 2023, y en su lugar, se resuelva acoger el Amparo interpuesto, todo ello, con costas.

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 22 de marzo de este año se tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación Ingreso Corte N°163-2023 y se confirió traslado al Consejo para la Transparencia y al tercero interesado, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

TERCERO: Que, evacuando el informe de rigor, don David Ibaceta Medina, en representación del Consejo para la Transparencia, solicita que el presente reclamo sea rechazado en todas sus partes, en virtud, de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, indica que la única información solicitada que obra en poder de la Subsecretaría de Economía es la publicada por el órgano en el link informado en su oportunidad. Precisa que en su oportunidad se procedió a revisar el enlace correspondiente, verificando que en él es posible advertir que se informa: a) Fecha: 16-04-2019; b) Identificador: AH001AW0631467; c) Asistentes: Gestor de Intereses, Ramón Frez; d) Representados: Ramón Frez; e) Materia: Realizar denuncias de irregularidades por diferentes funcionarios directivos del departamento de cooperativas; y f) Detalles. Ítem este último que arroja lo siguiente: Información General: Identificador: AH001AW0631467; Fecha: 16-04-2019 12:00; Forma: Presencial; Lugar: Av. Libertador Bernardo OHiggins 1449, Torre II, Piso 11; Duración: 1 hora, o minutos. En cuanto a los asistentes: Ramón Frez, en calidad de Gestor de



Intereses que representa a Ramón Frez. Por su parte, respecto de las materias tratadas se informa: Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos, y, en la especificación de materia tratada: realizar denuncias de irregularidades por diferentes funcionarios directivos del departamento de cooperativas.

Afirma que la referida información cumple con las exigencias establecidas por el artículo 8° de la ley N° 20.730 y que el Órgano de la Administración del Estado entregó la información requerida mediante la solicitud de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Acto seguido, advierte que la decisión recurrida no es ilegal, pues ese Consejo solo puede disponer la entrega de información que obra en poder de la Administración del Estado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, al paso que en el caso de marras la Cartera de Estado dio cuenta de la inexistencia de la información solicitada por la recurrente doña Jeannette del Carmen Gajardo Gonzalez de manera fundada, acreditando que no existían en su poder más antecedentes que los publicados en el link de internet que informó en su oportunidad.

Finalmente aduce que no procede la condena en costas a dicho Consejo, dado que dicha entidad se encuentra obligado a pronunciarse sobre una controversia jurídica suscitada entre un solicitante de información, un órgano del Estado, y eventualmente, un tercero interesado, y que en tal posición tiene motivo plausible para litigar.

CUARTO: Que también comparece en la presente causa doña Ruth Israel López, por el Fisco de Chile-Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y en su calidad de tercero interesado, solicitando el rechazo del presente reclamo, con costas.

Al efecto indica que la reclamante, en su solicitud, requirió los temas tratados en la audiencia de lobby detallada en su requerimiento, los que se encuentran publicados en el portal de lobby de la Subsecretaría, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley N°20.730 -que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios- específicamente en su artículo 8°, donde señala que la agenda pública debe consignar las audiencias y reuniones sostenidas



y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5° de la referida ley, y se debe indicar en dicho registro la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada y debe publicarse en el sitio electrónico establecido en las normas de transparencia activa que los rijan.

Afirma que toda la información que obra en poder de la Subsecretaría relacionada con dicha audiencia de lobby se encuentra publicada conforme a la ley 20.730 ya citada.

Sostiene que, en razón de lo anterior, la Subsecretaría respondió la solicitud de la reclamante de forma completa, señalando la fuente, el lugar y forma en que puede tener acceso a toda la información que obra en poder de la Subsecretaría relacionada con la audiencia de lobby, en los términos del artículo 15 de la ley N°20.285.

Argumenta que, al analizar de forma detenida el amparo deducido por la reclamante, se puede apreciar que aquel contiene elementos que innovan en relación a la solicitud de acceso a la información formulada, al pedir los nombres de los funcionarios que habrían sido denunciados, y adicionalmente, cualquier información relativa al contenido de la reunión sostenida entre el tercero que hizo la denuncia en contra de los funcionarios del Departamento de Cooperativas, situación que sería improcedente y vulneraría el principio de congruencia que debe presidir las solicitudes que plantean las personas respecto de la Administración, conforme dispone el artículo 24 de la Ley de Transparencia, aspecto que fue advertido por el Consejo para la Transparencia en el considerando 2) de su decisión que razonó: “atendido el tenor del requerimiento de la señora Gajardo González, lo solicitado refiere a copia de los temas tratados en audiencia de lobby llevada a cabo el 16 de abril de 2019 sobre denuncias de irregularidades por diferentes funcionarios directivos del departamento de cooperativas, que habría realizado el gestor de intereses en representación de una institución. Cabe señalar que lo referido en el amparo respecto de los nombres de los funcionarios que habrían sido denunciados, no es antecedente contenido en



la solicitud que da origen al presente amparo, por lo que el análisis y resolución del mismo se referirá sólo a los temas tratados en audiencia de lobby antes mencionada.”, por lo que no se advierte ilegalidad en la decisión.

Puntualiza que, sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría no cuenta con más información que la ya publicada, habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3. de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, que exige efectuar una búsqueda de la información requerida.

QUINTO: Que en consecuencia en el caso en análisis, revisada la cuestión controvertida y la decisión de amparo que se reclama en estos autos del Consejo para la Transparencia de fecha 24 de febrero de 2023 y en particular la entrega de información realizada en su oportunidad por la Subsecretaría de Economía a la reclamante, doña Jeannette del Carmen Gajardo Gonzalez, en relación a la reunión celebrada en día 16 de abril de 2019 en del Departamento de Cooperativas de la cartera ministerial indicada, se constata que la información entregada a la reclamante antes individualizada, mediante el enlace al sitio web que se le otorgó a su pedido, se ajusta plenamente a lo establecido en el artículo 8° de la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, que establece en lo pertinente: *“Los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior deberán consignar:*

1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°.

En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada”.

SEXTO: Que en consecuencia, al decidir como lo ha hecho el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo Rol N° C-6885-22, se ha atendido a las normas que regulan esta materia y en particular a la disposición legal establecida en el artículo 15 de la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública que señala *“Cuando la información solicitada*



esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar”, toda vez que la información solicitada por la reclamante le ha sido proporcionada precisamente mediante el acceso al sitio web de la Subsecretaría de Economía, en que consta el registro público de la información que ha requerido de la Administración del Estado cumpliendo para esto fines con su obligación de informar, por lo que adicionar más información como pretende la reclamante, esto es, personas que habrían asistido a la reunión y materias tratadas, excede el marco regulatorio legal de la información de informar y correlativamente el acceso a la información que tienen las personas, motivo por el cual no se observa una ilegalidad en la decisión de amparo reclamada, habiéndose dado cumplimiento a la información que solicitó la reclamante Gajardo Gonzalez primigeniamente pedida a la administración.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad deducido por doña Jeannette del Carmen Gajardo González en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C-6885-2022, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, con fecha 24 de febrero de 2023, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Oscar Torres Zagal.

N° Contencioso Administrativo-163-2023.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por la Ministra señora Ana Maria Osorio Astorga y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal. No firma la Ministra señora Osorio, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.





Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Abogado Integrante Oscar Torres Z. Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

